

C.A. de Santiago

Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada; con excepción de sus fundamentos noveno a décimo sexto, que se eliminan.

Y se tiene, además, presente:

**1°.-** Que habiéndose solicitado indemnización por el daño moral causado al demandante en virtud de los hechos en que se funda la demanda, con los antecedentes aportados por la mencionada parte y los allegados al proceso es posible presumir que los hechos ocurrieron de la manera como se relata en ese libelo, así como éstos caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad y que configuran, por tanto, una violación grave de las normas internacionales sobre derechos humanos.

**2°.-** Que tales normas del derecho internacional sobre derechos humanos están incorporadas y reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional y en su virtud cabe consignar que los crímenes e infracciones referidos son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hubieren cometido, afirmación que puede entenderse emanada también del Derecho Internacional General (ius cogens), reconocido por las convenciones internacionales.

**3°.-** Que la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable.

**4°.-** Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos.

**5°.-** Que la imprescriptibilidad de las acciones civiles reparatorias de los daños producidos por los crímenes referidos fluye de los convenios internacionales sobre crímenes de guerra, primero, y sobre derechos humanos después; en particular, en América, de la Convención Americana de





Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, y por cierto de la numerosa jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana que ella creó, cuyos fallos han aceptado las peticiones indemnizatorias, considerándolas integrantes o propias de la obligación de reparación que cabe al Estado en casos de violaciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, como se constata que ha sucedido en los hechos que fundamentan la denuncia en autos.

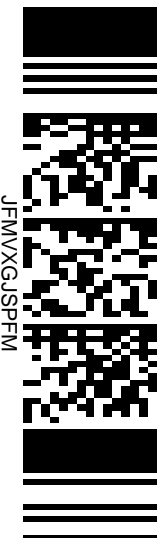
**6°.-** Que la referida obligación de reparación que cabe al Estado se puede cumplir con diversas medidas; entre otras -como ha ocurrido en Chile- con la instalación de entes que traten de establecer la verdad de lo ocurrido en ciertos períodos o circunstancias determinadas, con el reconocimiento público de las infracciones o violaciones, con el otorgamiento de pensiones, becas o beneficios diversos, con indemnizaciones, etc.

**7°.-** Que según consta en autos el demandante ha recibido ya una reparación voluntaria de parte del Estado, conforme a las leyes de reparaciones N° 19.992 y 20.874.

**8°.-** Que es indudable que el demandante sufrió con ocasión de los hechos de que se trata un daño difícil de ponderar y que corresponde asignarles el carácter de víctima de tales hechos, en conformidad al artículo 9 de la Resolución N° 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de marzo de 2006, que contiene los “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

**9°.-** Que además de la situación anteriormente reseñada, corresponde considerar, para fijar el monto de la indemnización, el hecho que el actor permaneció privado de libertad en el Ex Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena, por orden de la Fiscalía Militar de esa ciudad, entre el 13 de septiembre y el 6 de octubre de 1973, la circunstancia de haberse presentado la demanda con bastante posterioridad a la ocurrencia de los hechos que la fundamentan y también después del otorgamiento de las pensiones y beneficios referidos.

**10°.-** Que, en conclusión, y sobre la base de los razonamientos precedentes, se fijará prudencialmente el monto de la indemnización solicitada, en la suma que se señalará en la parte resolutive de esta sentencia.





Por estos fundamentos, **se revoca** la sentencia en apelada de seis de septiembre de dos mil veintidós y que está escrita a fs. 50, que rechazó la demanda de autos, y en su lugar se decide que se hace lugar a ella y se fija como indemnización por daño moral que el Fisco de Chile deberá pagar al actor, la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), reajustada con la variación que experimente el índice de precios al consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada, y con más intereses en caso de mora; sin costas, por haber tenido el Fisco de Chile motivo plausible para litigar y no haberse obtenido el total del quantum pretendido.

Se previene que la abogada integrante señora Herrera que concurre a la revocatoria, estuvo por regular el monto del daño moral demandado en la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), con los reajustes e intereses indicados.

**Regístrese y devuélvase.**

**N°Civil-3544-2023.**





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Fernando Ignacio Carreño O., Maria Loreto Gutierrez A. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dieciocho de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

